



Zapatero da un vuelco a su estrategia con un recorte de sueldos públicos sin precedentes

El presidente del Gobierno reduce un 5% el salario de los funcionarios, congela las pensiones de 2011, recorta el gasto para dependencia y elimina el 'cheque-bebé'

FERNANDO GAREA
Madrid

Después de seis años de mandato como presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero atravesó ayer el Rubicón y cruzó una de las líneas rojas que él mismo había prometido no traspasar nunca: el recorte de gastos sociales. Con un tono más grave del habitual y mucho más serio de lo que le es usual, Zapatero anunció en un sombrío Pleno del Congreso lo que él mismo describió como "duras medidas, sacrificios y esfuerzo importante", en forma de recortes donde más duelen. Es decir, reducción del salario de los funcionarios, recortes de pensio-

nes, freno a la aplicación de la Ley de Dependencia y supresión de ayudas a la maternidad, entre otros.

"A ningún presidente del Gobierno le gusta comparecer para anunciar recortes y a mí menos aún", terminó por confesar en el turno de réplica. Hasta ahora, la vida política de Zapatero se identificaba con la sonrisa, el optimismo y el anuncio de nuevas ayudas y derechos y esa trayectoria se quebró ayer con el anuncio de los recortes que le ha exigido la Unión Europea y hasta el propio presidente estadounidense, Barack Obama.

"Asumo esa responsabilidad, porque la situación es difícil y se-

ría insensato ocultarlo", terminó por confesar, mientras que en los escaños socialistas se aguantaba la respiración y se cruzaban miradas de diputados conscientes de la complicada papeleta y del precio político que les tocará pagar.

"Es ahora cuando más lo necesitamos para mantener entre nosotros a los inversores y mantener imagen de estabilidad. No es fácil dirigirse así a los ciudadanos", dijo también para intentar hacer compatible su vaticinio de que lo peor de la crisis ha pasado ya con el anuncio de sacrificios impopulares.

Zapatero hasta ahora enfatizaba que su Gobierno sacaría a España de la crisis sin recortes y su

imagen cuadraba mejor con la de la repetición anual de la cita de Rodiezmio (León) en la que ya era tradición el anuncio de subidas anuales de pensiones. Ayer le tocó ser el portavoz de las malas noticias, dirigidas precisamente a los colectivos que más ha cuidado en sus mensajes y en su política. Por eso se centró en la explicación de las circunstancias como causa última del cambio radical de rumbo: el elevado déficit, que hay que reducirlo del 11% al 3% antes de 2013, las dificultades de Grecia y los ataques especulativos contra el euro.

"Las circunstancias nos han obligado a tomar estas medidas", aseguró. Hace sólo una semana,

abominaba en La Moncloa de una "reducción drástica" del déficit y hace pocos meses la vicepresidenta primera rechazaba que se fuera a romper el pacto de subida salarial de los funcionarios, corrigiendo a su vez al secretario de Estado de Hacienda, que lo había anunciado.

Ahora, Zapatero se enfrenta a los sindicatos, aunque ayer insistiera en que no habrá reforma laboral sin acuerdo con los agentes sociales. La paz social que tanto le ha preocupado durante seis años como presidente salió ayer tocada del Congreso.

Y además, aunque su discurso de ayer iba dirigido sobre todo a los ciudadanos y a los mercados,

LAS RECETAS CONTRA EL DÉFICIT PÚBLICO DEL PRESIDENTE Y DEL LÍDER DE LA OPOSICIÓN

Lo que hará el Gobierno

Aprobará el viernes por decreto ley unas medidas para ahorrar 5.000 millones más en 2010 (hasta los 10.000) y un total de 10.000 en 2011. De ellos, 1.200 millones dependerán de comunidades y ayuntamientos. Prevé rebajar unas décimas la previsión del PIB para 2011.

- ▶ Reducir el sueldo de los funcionarios de forma proporcional un 5% de media en 2010 (sin llegar al 15%). Congelarlo en 2011. Al Gobierno, bajada del 15%.
- ▶ Suspender en 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas.
- ▶ Eliminar el régimen transitorio para la jubilación parcial de la Ley 40/2007.

- ▶ Eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero.

- ▶ Revisar el precio de los medicamentos (no los de referencia) y adecuar las unidades del envase a la duración estándar del tratamiento (incluso con monodosis).

- ▶ Suprimir para nuevos solicitantes la retroactividad del pago por dependencia al día de la presentación, excepto si la tramitación supera el límite de 6 meses.

- ▶ Reducir 6.045 millones de inversión pública estatal para 2010 y 2011, y 600 millones de Ayuda Oficial al Desarrollo.

- ▶ No se verán afectadas la reforma laboral, la revisión del Pacto de Toledo y la reestructuración de las cajas de ahorro.

Lo que propone el PP

Las medidas planteadas en el Congreso por el Grupo Popular deberían reducir en 10.000 millones el gasto del Estado en 2010, a lo que se sumaría el recorte de comunidades y ayuntamientos.

- ▶ Suprimir inmediatamente la Vicepresidencia tercera del Gobierno (centrada en la vertebración autonómica y el cargo de Manuel Chaves) y los ministerios de Igualdad (Bibiana Aído) y de Vivienda (Beatriz Corredor).

- ▶ Fusionar el Ministerio de Educación (dirigido por Ángel Gabilondo) con el de Cultura (Ángeles González-Sinde); y el de Trabajo e Inmigración (Celestino Corbacho) con el de Sanidad (Trinidad Jiménez).

- ▶ Revisar todas las subvenciones públicas con el propósito de eliminar aquellas que no estén debidamente justificadas, y reducir las demás (incluidas las que corresponden a asociaciones empresariales, sindicatos y partidos políticos).

- ▶ Diseñar y adoptar un plan completo de reestructuración del gasto público que evite las duplicidades entre la Administración central, las comunidades autónomas y los Ayuntamientos.

- ▶ Revisar todas las políticas y los programas de la Administración General del Estado.

- ▶ Llevar a cabo las reformas estructurales pendientes para consolidar la recuperación económica.

Plan de choque de Zapatero

El debate

ESPAÑA



Zapatero y sus tres vicepresidentes, Fernández de la Vega, Salgado y Chaves, durante el pleno del Congreso. / GORKA LEJARCEGI

el presidente del Gobierno pasó el mal trago solo de nuevo frente a todos los grupos parlamentarios. Ya es una costumbre en esta legislatura, pero la soledad siempre incomoda y duele más en momentos difíciles. Unos, como el PP, CiU y PNV por acusarle de llegar tarde a la toma de decisiones, y otros, como los grupos de la izquierda, por reprocharle que mire sólo al recorte de gasto y no al aumento de ingresos con más presión fiscal a las rentas más altas.

Es como si ayer empezara otra legislatura diferente y como si hubiera aparecido otro Zapatero distinto, con un discurso desconocido en él. "Se ha acabado el *Zetapé* social", le dijo gráficamente Joan Ridaó (ERC). "Ha nacido otro Zapatero", completó Joan Herrera (ICV). "Si tomo decisiones difíciles me critica y si no las tomo también", le terminó por decir Zapatero a Mariano Rajoy, pa-

ra quejarse de la estrategia del líder del PP de criticar lo que se hace y lo que no se hace. Porque Rajoy quiso hacer sangre y se apuntó a ejercer la crítica por no haber tomado antes medidas impopulares y, al tiempo, al reproche de acometer lo que llamó "el más importante recorte de derechos sociales de la democracia".

Su discurso fue el de "ya lo decía yo" y el del populismo de anteponer a cualquier recorte de gasto social la reducción de ministerios, empezando por la Vicepresidencia Tercera. Y hasta se metió en el lío de insistir en la reducción drástica de subvenciones a partidos políticos y sindicatos, justo el día después de que un informe de Hacienda denunciara presunta financiación ilegal del PP.

Presentó a Zapatero como un presidente forzado por los socios europeos a hacer las reformas que no ha querido hacer en dos años de crisis. "Tendrá que hacer lo que no ha querido hacer: gobernar, pero tutelado en un país bajo protectorado"; "han dicho en Europa que a Zapatero no se le puede dejar solo y que hay que vigilarle para que no exporte su incompetencia".

No fue más suave en el fondo, pero sí en la forma, el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, en su nueva condición de político mejor valorado según el CIS. Habló de "nueva rectificación" e incidió en la acusación de la improvisación: "Han pasado dos años en los que el presidente desoía nuestros planteamientos, pero ha aceptado en una semana la locura que le han puesto sobre la mesa los mercados. Ha perdido dos años de mandato". Y Josu Erkoreka (PNV) le espetó que sus medidas "se comen de un bocado miles de frases y promesas" pronunciadas en los últimos dos años.

El recorte le puso en confrontación con los partidos minoritarios de la izquierda que hasta le advirtieron, como hizo Herrera, de que tendrá una "oposición contundente" en la Cámara y en la calle. "Pagan los más débiles. Los mercados han terminado por imponer una reforma y un recorte" y "¿por qué no recupera el impudido de patrimonio?", le dijo el diputado de ICV. "Usted es débil con los fuertes y fuerte con los débiles", concluyó Ridaó.

"Los sectores populares van a pagar una crisis que no genera-

ron", remató Francisco Jorquera (BNG).

Sólo al final, Zapatero incluyó la posibilidad de estudiar en el futuro medidas fiscales para que las rentas más altas paguen los impuestos. Lo hizo sin concretar y dando a entender que lo incluirá en los Presupuestos para 2011. Y fue tan poco preciso como confuso, porque le respondió a Rajoy que exigir un mayor esfuerzo fiscal a las rentas más altas no necesariamente debe suponer una subida de impuestos.

"Hoy no era el día", dijo el presidente del Gobierno para explicar que no incluyera esa posibilidad.

"A ningún presidente le gusta anunciar recortes y a mí menos aún"

Hace sólo una semana abominaba de una "reducción drástica" del déficit

dad de reforma fiscal en su discurso inicial como una medida más para reducir el déficit.

Metidos en faena de recortar, el portavoz socialista, José Antonio Alonso, le tomó la palabra a Duran para acometer una reducción del salario de los diputados que ya lleva dos años congelado.

Casi todos los portavoces le pidieron a Zapatero gestos políticos en forma de reducción de ministerios, tal y como le exigen dos resoluciones aprobadas por el Congreso en los últimos meses. "Es el chocolate del loro, pero es un gesto político necesario hacia los que verán recortadas sus prestaciones", le dijo Erkoreka. Pero Zapatero se atrincheró en que eso apenas supondría un ahorro real y, por tanto, no está dispuesto a hacerlo. De momento, porque también dijo que no tomaría otras medidas que ayer no tuvo más remedio que anunciar. Y de todos los portavoces, sólo Rosa Díez (UPyD) pidió elecciones anticipadas. Duran olvidó su propuesta de Gobierno de concentración y Rajoy ya no se atrevió a repetir el llamamiento a los diputados del PSOE para que se rebelen y sustituyan a Zapatero.

Los barones arrojan a su líder

El presidente explica que el plan evita recortes del subsidio de desempleo

ANABEL DÍEZ
Madrid

"O se aplicaban estas medidas de recorte para funcionarios y pensionistas o había que tocar los subsidios de desempleo; había que elegir". Con este dilema, Zapatero intentó convencer ayer a los principales dirigentes regionales del PSOE de la oportunidad de las medidas de recorte anunciadas unas horas antes por él en el Congreso de los Diputados.

Los barones del PSOE, secretarios regionales y provinciales, aguardaban ayer en la sede del partido en Madrid a que su secretario general llegara del Congreso. "El presidente estaba claramente afectado, pero muy firme y seguro de que estas medidas eran imprescindibles; y así lo entendimos todos". Esta impresión de un secretario regional del PSOE coincide con el relato que otros compañeros de partido hacen de la reunión convocada el día anterior por José Blanco, vicesecretario general; Leire Pajín, secretaria de Organización; y Manuel Chaves, presidente del PSOE.

El encuentro era extraordinario y urgente. Se trataba de que Zapatero, y los principales dirigentes de su ejecutiva, se reunieran con el poder territorial del partido para explicarles la dureza del plan que se va a tomar y, además, que lo explicaran y justificaran por toda España.

Aunque el ambiente fue de pesadumbre, no quedó la menor duda de que el partido se volcará en apoyar las medidas "duras y de sacrificio" planteadas, según las definió Leire Pajín. Zapatero mantiene intacto su crédito personal y político ante su grupo parlamentario y su partido. Aunque diputados y senadores reconocieron que era el peor día de la legislatura, su portavoz parlamentario, José Antonio Alonso, fue el primero en defender y justificar las medidas del Gobierno al que tiene que sostener parlamentariamente.

A Zapatero le tocaba después recabar el apoyo de su partido. Y lo tuvo. Los asistentes a la reunión escucharon de su secretario general un relato "exhaustivo" de sus vivencias de las dos últimas semanas, que desembocaron en una reunión del Eurogrupo para tomar medidas de rescate a cualquiera de los países del euro y, además, la exigencia a España y Portugal de que tomaran medidas drásticas contra el déficit. Del relato desprendieron que había pasado jornadas de gran inquietud. Ahora bien, el líder socialista no reconoció en ningún momento que estas medidas hubiera habido que tomarlas antes sino que han venido determinadas por los últimos acontecimientos. Y tuvo que elegir para reducir el déficit entre el sueldo de los

funcionarios, las pensiones y las prestaciones por desempleo. "El presidente señaló que optó por recortar sueldo a quien tiene trabajo y no tocar el subsidio de quien no tiene nada, como son los desempleados", señala un asistente a la reunión.

La preocupación de los barones por la reacción de los sindicatos fue evidente en esta reunión en la que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, entre otros, pidió que se trabajara por mantener el diálogo con los representantes de los trabajadores. Zapatero, según distintos testimonios, avanzó su confianza en que acabará bien la negociación sobre la reforma laboral, aunque reconoció que "puede haber tensiones" con los

Para diputados y senadores del PSOE ayer fue el peor día de la legislatura

Los dirigentes regionales piden que las medidas sean "progresivas"

sindicatos por la rebaja de sueldo a los funcionarios. "Vamos a mantener el diálogo con los sindicatos y explicar las medidas a los sectores afectados; nosotros damos la cara", señaló Pajín. Tanto Roberto Jiménez, secretario general de los socialistas navarros, como Óscar López, líder del PSOE de Castilla y León, pidieron a sus compañeros que "no se preocupen en exceso" del PP porque ya se sabe que atacará con denuedo.

Así, estos pidieron que se explique claramente a la sociedad que las medidas son imprescindibles pero que tienen carácter progresivo. En esta faceta puso el énfasis el secretario general de los socialistas murcianos, Pedro Saura. Y hubo larga explicación de Zapatero sobre la progresividad de las medidas ya que no se ven afectadas las pensiones mínimas y la rebaja de sueldo a los funcionarios es proporcional a sus sueldos. "También habrá que pensar en medidas para los que más tienen o más han contribuido a la situación de crisis", señaló Óscar López. Los presidentes socialistas reconocieron la dureza y la dificultad del momento pero se comprometieron a apoyar al presidente sin fisuras. Dicen que Zapatero lo agradeció con un punto de emoción.

+ EL PAÍS.com

► Vídeos

Intervenciones de Zapatero y Rajoy ayer en el Congreso.

La complejidad del peor real decreto

EL PAÍS, Madrid

El Consejo de Ministros que preside José Luis Rodríguez Zapatero dará mañana su visto bueno a un decreto ley que nunca hubiera deseado aprobar. De hecho, hasta hace sólo unos días, nunca pensó Zapatero que algunos de sus principales referentes de política social —las pensiones, la Ley de Dependencia o la Ayuda al Desarrollo— podrían sufrir las consecuencias de la crisis económica.

El recorte salarial a los funcionarios, el primero de este tipo en la historia de España, que Zapatero decidió después de que su vice-

presidenta María Teresa Fernández de la Vega defendiera a capa y espada el acuerdo de la leve subida salarial en la Función Pública, acarrea además algunas complicaciones legales cuya solución nadie pudo ayer anticipar.

Por un lado, la medida que reducirá un 5% de media los ingresos de los funcionarios pretende extenderse también a los trabajadores de las empresas, entes y organismos públicos estatales (Renfe, AENA, Adif...), aunque para ello el Gobierno busca aún fórmulas legales sin poder precisar cuáles serán.

Los gobiernos de ayuntamientos y comunidades están pen-

dientes del real decreto ley que apruebe el Consejo de Ministros para saber cómo les va a afectar y cómo deben actuar con las decenas de miles de empleados de sus empresas municipales de transporte, por ejemplo.

Además, el decreto ley debe ser convalidado en el Congreso de los Diputados y el Gobierno parece que se ha quedado solo en la gestión de la crisis económica, sin que se puedan vislumbrar a estas alturas aliados suficientes (al menos siete votos) para que al presidente del Ejecutivo, en su momento más amargo, se le haga llevadero este periodo de incertidumbres y noticias negativas.



GORKA LEJARCEGI

“Les anuncio sacrificios”

▶ “Es una respuesta sencillamente inimaginable sólo unos días antes (...) para reaccionar a la fuerte inestabilidad de los mercados, una amenaza tan seria y real (...) del orden financiero global, (...) en unas circunstancias que carecen por completo de precedente”.

▶ “El Gobierno ha reaccionado ante cada uno de estos inesperados desafíos (...) adaptando sus decisiones a la naturaleza del problema. (...) Estos 20 meses ha mantenido un comportamiento coherente. (...) No se ha empeñado en aplicar siempre los mismos recursos”.

▶ “Soy consciente de que muchos ciudadanos no entenderán que, precisamente cuando el Gobierno les está anunciando que se ha iniciado ya la recuperación, les pida más esfuerzo, les solicite más compromiso, les anuncie sacrificios”.

▶ “Son los que nada han tenido que ver con (...) la crisis los que han sufrido sus consecuencias. Y son los que mayoritariamente deben contribuir a los esfuerzos necesarios para corregir sus efectos. (...) La columna que sujeta al país, que carga con su peso”.

▶ “Menos lo es, aún, para un Gobierno que se ha empeñado, durante los años de bonanza, en dirigir lo mejor de sus esfuerzos a mejorar la situación de la mayoría de los ciudadanos y, especialmente, de los menos favorecidos”.

▶ “[Llamo a los grupos políticos] a su responsabilidad, su esfuerzo, su compromiso. (...) Todos deberíamos implicarnos. (...) Nada justificaría que algunos se sintiesen ajenos a este esfuerzo colectivo. (...) Asumo mi responsabilidad y me comprometo con ella”.

▶ “La situación es difícil y sería insensato ocultarlo. Pero puedo asegurarles que el Gobierno no desfallecerá. (...) Tiene gracia que hoy me diga [Mariano Rajoy] que no concreto las medidas. Hasta las medidas más duras y más difíciles las concreto”.

Y COINCIDEN EN...

10.000 millones menos

Los dos partidos plantean un recorte del gasto público de 10.000 millones para 2010.

Otra etapa de recesión

Rajoy: “Es verdad, entramos en una segunda fase, dejamos atrás las grandes caídas”.

El PIB sube un 0,1%

Rajoy: “No es irrelevante. Siempre será mejor crecer, aunque sea una décima”.

La reforma de las cajas

Zapatero: “Agradezco su disposición a una acción conjunta que la impulse”.

Las autonomías

Rajoy: “Estoy de acuerdo en que las comunidades tienen que reducir su déficit”.

Un recorte para todos

Rajoy: “Estamos dispuestos a hablar de un recorte justo y equitativo que afecte a todos”.

La gravedad de la crisis

Zapatero: “La situación es difícil, es insensato ocultarlo. Asumo mi responsabilidad”.

“Va por muy mal camino”

▶ “Viajando descubrió el señor [José Luis] Rodríguez Zapatero una crisis económica que no lograba percibir desde España; y viajando ha descubierto que es muy importante recortar ese déficit público que hace siete días no quería recortar”.

▶ “Esa es la senda que hemos recorrido hasta hoy, la senda griega. Esa senda se ha cerrado. (...) Ahora otros se harán cargo, y tendrá que actuar al dictado (...) bajo directrices que no son españolas. (...) Desarrollar una política económica de un país bajo protectorado”.

▶ “Ha hecho usted un gran recorte de derechos sociales, señor presidente del Gobierno, contradiciendo todo lo que lleva diciendo a lo largo de los últimos años. (...) Jamás el Partido Popular ha planteado lo que usted está planteando aquí”.

▶ “Sus errores, sus dilaciones, sus improvisaciones, su incapacidad la vamos a pagar todos los españoles, pero especialmente los pensionistas, los empleados públicos, las futuras madres. (...) Es única y exclusiva responsabilidad suya”.

▶ “Nunca más vuelva a hablar en esta Cámara sobre derechos sociales ni a hablar sobre el PP en esta materia. Es el mayor recorte de derechos de la historia de la democracia (...) Acaban pagando las personas que pasan más dificultades en su vida cotidiana”.

▶ “Un gobernante debe asumir sus responsabilidades, no echar las culpas de lo que pasa a los demás. Y en cuanto a mi responsabilidad, yo no voy a rehuir. (...) Pero usted debe hacer antes otras cosas. (...) Quedo a la espera de su respuesta”.

▶ “Estamos entrando en una segunda fase, pero seguimos en crisis. No confunda salir de la recesión con superar la crisis. (...) Lo peor ha pasado. Ahora viene lo malo. (...) No niegue ahora la fase de estancamiento. (...) Usted dice muchas cosas pero no concreta”.

El derrumbe del tabú

XAVIER VIDAL-FOLCH



Ha sucedido como con el muro de Berlín. Con estrépito.

En pocas y agónicas horas, desde el pasado viernes hasta ayer, se ha derrumbado el gran tabú de la política económica española. Y los de la europea. De forma simultánea y conectada.

En aras de reenderezar la economía doméstica y asentar el futuro de la zona euro, el presidente Zapatero ha renunciado a su *mantra*, no tocar el gasto social.

Traslada la incipiente austeridad también a los sueldos de los funcionarios, a las jubilaciones medias y altas, a la dependencia, al cheque-bebé... Gran rectificación, se dijo ayer. *Et pour cause*. Nace un gobernante, aquel que decide lo que conviene, aunque sea amargo y allegue fracasos electorales; no lo que le gusta. Quizá para durar poco. Churchill perdió cuan-

do avizoraba la victoria, pero la fabricó. Kohl pagó en las urnas su apuesta por el euro, pero ancló a Alemania en Europa.

España cumple con estas medidas de austeridad el compromiso con la Unión, y se autoprotege. Paga su contrapartida a la creación de un Fondo de emergencia para el rescate de euro-socios en apuros financieros. El surgimiento de este mecanismo es una revolución copernicana de alcance similar a la creación del euro. Completa la unión monetaria (hasta hoy, moneda y Banco Central) garantizando su estabilidad. Y acelera la unión económica de los 27 apretando las tuercas de las políticas de saneamiento de las finanzas públicas y la coordinación presupuestaria. Europa resucita del duermevela.

Para alcanzar ese hito, la UE ha debido a su vez romper tres tabús. El de que los Gobiernos sólo podían acompañar a los mercados: han plantado cara con 750.000 millones a sus segmentos más especulativos. El de mantener el veto, pues la activación de los rescates se hará por la Comisión y ya no por unanimidad del Consejo (los Gobiernos). Y el de actuar sólo caso por caso, como ante Grecia: han establecido un mecanismo permanente (de momento por tres años) y no uno improvisado para cada ocasión.

Apenaba ayer oír reacciones castizo-

provincianas denunciando que unos “extranjeros” imponen su “dictado” a España. Que viajen. Y aprendan que ambas decisiones, la española y la europea, son parte del mismo paquete, haz y envés.

Lo son también por su origen. El terremoto en los mercados de la pasada semana obligó a España y a Europa a crecerse frente a la crisis, so pena de sucumbir ante ellos. De ahí la renuncia del Gobierno a su catecismo del gasto social. Y la de Alemania al síndrome de mirar a otro lado si arrecia una tormenta financiera.

Todos afinaron su papel, menos uno, que seguía con su leña al mono, aunque ya hable inglés

Contra Zapatero: es cierto que estaba instalado en el vaivén, sin lograr hasta ahora mostrar contundencia y, pues, convencer. A su favor: es cierto que la turbulencia especulativa de “las manadas de lobos” (retrató el ministro sueco de Finanzas, Anders Borg) rompió su cadencia de reformas, demasiado tenue. Pero nadie añadió ayer en el Congreso la otra

explicación clave de la vorágine: la vacilación y tardanza europeas (cuatro meses) para suturar la crisis griega, lo que facilitó el contagio enloquecido a otros.

El tabú de la intangibilidad absoluta del gasto social debe ceder paso a un paradigma más realista, un reparto equitativo de la factura de la crisis. Entre todos. De cada cual según sus posibilidades. Las izquierdas y algunos centros —como Coalición Canaria— reclamaron con razón una equidad que quedaba pospuesta. Ya no por la vía del gasto, sino del ingreso: teníamos parados ajustándose el cinturón, tendremos funcionarios y pensionistas en lo mismo, pues que también se sacrifiquen los más prósperos. Quedó como asignatura pendiente. Y los nacionalismos enarbolaron la productividad como causa mayor del crecimiento y de la lucha contra el déficit: cómo crecer, otra asignatura. Todos afinaron en su papel.

Todos, menos uno. Ahora que parece que tenemos un presidente-presidente, esto es, alguien capaz de repartir disgustos y no sólo carantoñas, el jefe de la oposición mantiene su gastado oráculo: leña al mono hasta que hable inglés. Y cuando lo habla, leña doble. Con lo eficaz que le hubiera sido jugar a padre del hijo pródigo, darle la bienvenida a la austeridad y exigirle cumplir con buena letra.



Compartida, la vida es más





Primera rebaja salarial de la democracia

Las retribuciones caerán de media un 5% con exenciones para los 'milleuristas'

LUCÍA ABELLÁN
Madrid

Los funcionarios encarnan el cambio radical que ha experimentado el discurso del presidente del Gobierno en poco tiempo. De defender la mejora del poder adquisitivo de los empleados públicos, José Luis Rodríguez Zapatero ha pasado a hacer historia con la primera rebaja salarial a este colectivo en democracia. Hasta ahora, la medida más drástica había sido la congelación que aplicó Mariano Rajoy como ministro de Administraciones Públicas en 1997. Entonces, Zapatero, responsable socialista de esa cartera en el Congreso, se opuso ferozmente. Los acontecimientos han colocado ahora a los mismos protagonistas en el papel contrario.

Todos los empleados públicos (2,6 millones sumando los de la Administración central, las comunidades, los ayuntamientos y las universidades) se verán afectados por la reducción media del 5% a partir de junio. El Gobierno trabaja ahora en distribuir la por tramos de renta. Del recorte quedarán exentos los *milleuristas* (probablemente quienes perciben menos de 1.200 euros al mes), según fuentes del Ejecutivo; para el resto se graduará hasta un máximo del 15% que afectará a los miembros del Gobierno a partir del nivel de secretario de Estado. El objetivo es que ese mismo porcentaje se aplique también a los altos cargos de los poderes legislativo y judicial.

Tanto funcionarios como personal laboral de las Administraciones verán mermaidadas sus nóminas. El decreto que aprobará mañana el Consejo de Ministros para aplicar de forma inmediata debe incluir a trabajadores de empresas públicas como Renfe, AENA y RTVE, pues sus retribuciones figuran dentro de las reguladas en los Presupuestos Generales del Estado como gastos de personal. Lo mismo ocurre en las empresas dependientes de entes autonómicos y locales.

Las rebajas de sueldo en la función pública

MIEMBROS DEL GOBIERNO



José Luis Rodríguez Zapatero
Presidente del Gobierno

SUELDO ANUAL:
91.982,40



María Teresa Fernández de la Vega
Vicepresidenta primera

SUELDO ANUAL:
86.454,36

REDUCCIÓN DEL 15%

Afecta a todos los miembros del Ejecutivo a partir de secretario de Estado

EJEMPLOS DE SALARIOS PÚBLICOS

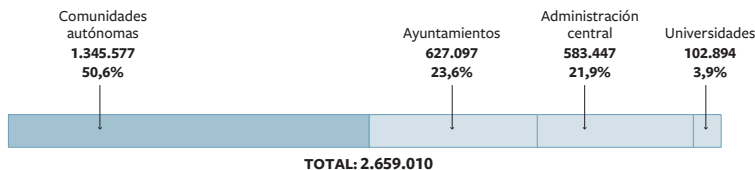
Sueldo mensual (no incluye trienios, complementos ni pagas extraordinarias)

	TIPO A1	TIPO A2	TIPO B	TIPO C1	TIPO C2	AGRUP. PROFES. E
Nivel 30	2.181	2.005	1.875	1.754	1.620	1.568
Nivel 20	1.624	1.448	1.318	1.198	1.064	1.011
Nivel 10	1.388	1.212	1.082	961	827	775
Nivel 1	1.258	1.082	952	831	697	645

REDUCCIÓN MEDIA DEL 5%

CONGELACIÓN

FUNCIONARIOS POR ADMINISTRACIONES



Fuente: Ministerios de Economía y de Presidencia.

EL PAÍS

La bajada es gradual con un máximo del 15% a partir de secretario de Estado

El decreto deberá incluir en el tijejetazo a las empresas públicas

Con los recortes anunciados ayer, las Administraciones en su conjunto ahorrarán unos 4.400 millones de euros al año, que en 2010 se quedarán en poco más de la mitad porque la medida entra en vigor en junio. A las cuentas del Gobierno sólo les afectan unos 1.000 millones en un año (algo más de 500 en este ejercicio), pues la Administra-

ción central emplea al 22% de todos los empleados públicos del país.

Para 2011 la medida es igualmente dura, pues el descenso del 5% se consolida para el año próximo. Es decir, la congelación prevista en 2011 se aplica sobre el nivel de retribución que quede tras la rebaja que entra en vigor el próximo mes (no se recupera el nivel inicial).

Los tijejetazos invalidan automáticamente un elemento que Hacienda observaba con recelos para su plan de estabilidad 2010-2013. Se trata del acuerdo plurianual que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, firmó con los sindicatos de la función pública hace poco más de seis meses, cuando la Gran Recesión había mostrado ya toda su crudeza. El acuerdo fijaba una tibia subida del 0,3% para 2010, con una importante bala en la recámara. El

Gobierno se comprometía a restituir el poder adquisitivo perdido en el tiempo de vigencia del acuerdo (2010-2012) al final de ese periodo. Si este pacto siguiera en vigor, los Presupuestos de 2012 y 2013 deberían incorporar los fondos necesarios para revalorizar los salarios en función de la inflación real en ese periodo, una auténtica bomba de relojería que amenazaba con trastocar los planes del Ministerio de Economía de reducir la masa salarial pública. "El acuerdo queda derogado por el decreto que se va a aprobar", aclaran fuentes gubernamentales.

Con él desaparecen también todas las excepciones que ese texto establecía a los límites que el Ejecutivo ha fijado en la reposición de las vacantes públicas. Sanidad, educación, Fuerzas Armadas, dependencia, investigación y otras áreas de menor peso quedaban excluidas de la es-

tricta tasa de sustitución (sólo se repone una de cada 10 bajas) aplicada este año y de las que se pudieran decretar en adelante.

El Gobierno en su conjunto ha tardado en ser consciente de que este acuerdo resultaba difícilmente aplicable en época de vacas flacas. El Ministerio de Economía tuvo que emitir una rectificación cuando su secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, mencionó que esos acuerdos debían ser revisados. Los sindicatos de la función pública se alarmaron y la propia De la Vega ratificó lo suscrito en

La medida invalida las subidas pactadas entre De la Vega y los sindicatos

Los funcionarios habían acordado una subida salarial del 0,3% este año

septiembre, que queda ahora en papel mojado. La vicepresidenta se reunió el martes por la tarde con los líderes sindicales para comunicarles la decisión, que Zapatero trató poco después con Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CC OO).

La principal duda reside en cómo se modificarán en un tiempo récord las tablas salariales de casi todos los funcionarios, pues las nuevas retribuciones deben estar listas en junio. Una forma sencilla de hacerlo consiste en aplicar los descensos a las pagas extraordinarias, pues no hay que cambiar toda la estructura.

Con el plan anunciado ayer, España supera en intensidad las medidas adoptadas por la mayor parte de países europeos, aunque queda lejos de lo aplicado en los países con peor situación: Irlanda, donde los sueldos públicos recibirán un recorte del 15% en dos años, y Grecia (16%).

Plan de choque de Zapatero Los sindicatos

ESPAÑA

Los sindicatos amenazan con un conflicto "a la altura del recorte"

Toxo y Méndez advierten que las medidas afectan a la marcha del diálogo social

MANUEL V. GÓMEZ
Madrid

La cara de Cándido Méndez, secretario general de UGT, era la viva imagen de la decepción con que los sindicatos han acogido las medidas que Zapatero detalló ayer en el Congreso de los Diputados. Ni Méndez ni Ignacio Fernández Toxo, líder de CC OO, pronuncian abiertamente aún la expresión huelga general. Pero no hay duda, ayer esa posibilidad ganó muchos enteros. "La ciudadanía tiene que expresar la máxima sanción social a estas medidas de recorte", proclamó Toxo. Blanco y en botella.

El argumentario sindical dice

que sólo tiran mano de su arma más contundente, la huelga general, cuando se recortan los derechos de los trabajadores y los pensionistas. El Gobierno hasta ahora no había propuesto ninguno. Pero los recortes que ayer puso sobre la mesa Zapatero son exactamente eso: recortes de salarios para los funcionarios y congelación de las pensiones, entre otros. "Nos toca gestionar el conflicto social. El grado de ajuste es serio y va a exigir una respuesta", declaró Méndez con un lenguaje mesurado y escurridizo. También lo fue Toxo. "No descarto ningún escenario", afirmó, sin llegar a mencionar ni una vez la expresión huelga general.

"Aquí se produce un punto de inflexión", definió Toxo. Para él y para Méndez, los recortes del Gobierno marcarán un antes y un después en la relación de Zapate-

Los representantes de los funcionarios hablan de convocar un paro en el sector

ro con los sindicatos. Tanto es así que pese a que ambos se mostraron dispuestos a seguir negociando un acuerdo para la reforma laboral, los dos declararon que el

nuevo escenario afectará a las conversaciones que se mantienen. "A nadie se le escapa que este recorte no ayuda al acuerdo, lo perjudica", proclamó Méndez.

Los dos líderes sindicales tendrán hoy la oportunidad de decirle al presidente a la cara lo que piensan de su plan. Zapatero les ha citado para explicarles los detalles a las 13.30. Podrán exigirle que rectifique, una posibilidad que Toxo no quiso descartar ayer, aunque con poca fe en que el presidente les preste más atención a ellos que a la Unión Europea y a los mercados.

Donde no hay miedo a pronunciar la expresión huelga o paro general es entre los representan-

tes de los funcionarios. Lo hizo Julio Lacuerda, el líder de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Antes de que hoy lo aprueben los órganos de dirección de su sindicato, Lacuerda se mostró partidario del paro general entre los funcionarios. Su enojo era palpable. "Se ha hecho con nocturnidad y alevosía. La respuesta de UGT va a estar a la altura de la agresión. Merece una huelga de la función pública", clamó. La reacción de CC OO, el sindicato mayoritario en el sector, fue convocar para hoy a su comité federal para decidir la "puesta en marcha de las acciones de presión, su intensidad y el calendario".

Por su parte, el presidente del sindicato CSI-CSIF, Domingo Fernández, que recibió la llamada de la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega en la noche del martes para avisarle, habló de acudir a los tribunales para frenar los planes del Gobierno. A última hora de ayer, el sindicato convocó una huelga general en la Administración, pero no especificaba el día.

Sacrificios estériles

OPINIÓN

Cándido Méndez

El Gobierno ha decidido sacrificar el poder adquisitivo de los trabajadores públicos y de los pensionistas a los dictados de los mercados financieros. Y es muy probable que sea un sacrificio estéril. Cuando la actividad económica ha empezado a dar algún titubeante indicio de recuperación se ha decidido, sin más, retirarle el oxígeno. Ese crecimiento del 0,1% del PIB registrado por la economía en el último trimestre supone un avance considerable desde el -1,7% registrado en el primer trimestre de 2009. Es un ligero y titubeante repunte que tiene mucho que ver con el oxígeno aportado por las políticas públicas de estímulo a la economía y con las políticas de mantenimiento del poder adquisitivo de las rentas que ahora se deciden eliminar.

El Gobierno español anuncia este serio ajuste del gasto público al dictado de unas políticas europeas que, si ya nos parecían equivocadas cuando interpretaban el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en sus términos y tiempos más rígidos, ahora se reconsideran en medio de una oleada de ataques financieros a la zona euro. La experiencia nos demuestra que la lógica de esos mercados es siempre pedir más,

considerar insuficiente cualquier ajuste.

Estamos ante una situación muy seria, y resulta preocupante que se haya decidido acometer una reducción del déficit público atendiendo sólo al ajuste del gasto —que implica sacrificios para los pensionistas, para muchos trabajadores, y sus familias— pero no se hace mención a la posibilidad de combatir el déficit mejorando los ingresos fiscales, por la vía de la lucha contra el fraude fiscal y de una subida de impuestos a lo que más tienen.

Estamos ante una quiebra en el discurso político del Gobierno, que tendrá consecuencias en el escenario de las relaciones y la interlocución con los sindicatos, porque está en riesgo la recuperación económica, porque el recorte del 5% en la retribución de los funcionarios supone la ruptura de acuerdos firmados, y porque nos sitúa en un escenario que suma dificultades al ya de por sí complicado proceso de diálogo social que mantenemos con las organizaciones empresariales sobre el mercado laboral y que tenemos la intención, no obstante, de mantener y llevar a buen término. Se ha abierto un conflicto social que tendrá una expresión serena, reflexiva, responsable, pero también clara y contundente.

Cándido Méndez es secretario general de UGT.

Mercado versus democracia

OPINIÓN

Ignacio Fernández Toxo

Las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados merecen el máximo rechazo social. Son injustas y antieconómicas y van a deprimir aún más la economía. La UE, incapaz de ofrecer una respuesta concertada para impedir los movimientos especulativos alrededor del euro, actúa sobre los países en peor situación y exige a España que anticipe los efectos del plan de austeridad aplicando gran parte del ajuste hasta 2011. No deja de ser paradójico que causantes de la crisis impongan ahora sus dictados.

El presidente, de acuerdo con las pautas de la Unión Europea, ha cedido a las presiones de los mercados y ha presentado medidas con víctimas conocidas: empleados públicos, pensionistas, personas dependientes y parados. Bajo el sugerente lema de *un esfuerzo colectivo, equitativo y justificado*, Zapatero se ha rendido a la lógica del liberalismo más rancio y ha cargado contra los de siempre; ni siquiera ha sido capaz de recuperar tributos como el impuesto de patrimonio o el de sociedades que con irresponsable frivolidad entró en su primer mandato. Por supuesto sigue sin atreverse a poner en marcha una

ambiciosa reforma fiscal para que las rentas tributen de forma más justa.

Hace años que CC OO identificó los riesgos de un modelo de crecimiento que creaba empleo con la misma velocidad que lo ha destruido. Hace un año CC OO emplazó al Ejecutivo para que liderara un gran acuerdo político y social que repartiera con equidad los esfuerzos para salir de la crisis. No convenció al Gobierno. El movimiento sindical ha tenido un comportamiento impecable y ha dado sobradas muestras de responsabilidad. Recientemente ha firmado con la Administración y las organizaciones empresariales sendos acuerdos para moderar el crecimiento de los salarios de los empleados públicos (ahora el Gobierno los reducirá un 5%) y racionalizar la negociación colectiva.

No renunciaremos al diálogo social; a concretar las reformas necesarias con el Gobierno y las organizaciones empresariales para reformar el mercado laboral o abordar el futuro de los sistemas de protección social. Pero rechazamos las medidas de ajuste anunciadas por el presidente y advertimos que trabajaremos conjuntamente con UGT para responder, sin descartar ningún escenario de movilización.

Ignacio Fernández Toxo es secretario general de Comisiones Obreras.

PRECIOS FLASH
by AIRFRANCE

BOSTON LA HABANA
419€ I/V 499€ I/V

sólo hasta el lunes

www.airfrance.es

Tarifas todo incluido con gastos de emisión comprando en www.airfrance.es
Tarifas válidas sólo hasta el 17/05/2010, sujetas a condiciones especiales y disponibilidad
Para más destinos, consultar en www.airfrance.es

El acceso a la jubilación parcial se endurece

L. A., Madrid

La jubilación parcial se endurecerá en el momento en que entre en vigor el conjunto de medidas que anunció ayer el presidente Zapatero para contener el déficit. Esa fórmula, que disfrutaban unas 30.000 personas, con una pensión media de 21.000 euros al año, se reguló de forma más estricta en 2008 ante el coste que supone al sistema permitir a un trabajador jubilarse parcialmente (y pagarle parte de la pensión) entre los 60 y los 65 años para abonarle la prestación íntegra a partir de entonces. La reforma de 2008 fijó un periodo transitorio para que el endurecimiento fuera progresivo. Tras los anuncios de ayer, los cambios entrarán en vigor inmediatamente.

Hasta 2008, cualquier persona que hubiera cumplido 60 años y que acreditara una antigüedad mínima en una empresa podía acogerse a la jubilación parcial a cambio de que la empresa contratara a un relevo. La principal ventaja de ese régimen consiste en que el pensionista no ve mermada su prestación, como sí ocurre en la jubilación anticipada. Esas condiciones extendieron mucho su uso, con el consiguiente gasto para el sistema público.

En 2008 se fijaron varios requisitos: una edad mínima de 61 años para acogerse a esta figura, una antigüedad de seis años en la empresa y un periodo de cotización de al menos 30 años. Pero los cambios no entraron en vigor de inmediato, sino que esos topes se alcanzarían en 2013. Con la entrada en vigor del decreto, los 61 años y el resto de condiciones se aplicarán inmediatamente.

15 años de cotización

También se elimina el periodo transitorio aplicable al mínimo de años que es necesario cotizar para acceder a una pensión. En 2008, la ley pasó de exigir 12,5 años efectivos a 15, un tránsito que también debía culminar en 2013. En cuanto se apruebe el decreto, los pensionistas tendrán que acreditar 15 años reales cotizados para acceder a una pensión contributiva.

Con la eliminación de estos dos regímenes transitorios, la Seguridad Social confía en ahorrar unos 500 millones de euros anuales. Hay que tener en cuenta que ese dinero no supone reducción del déficit en la Administración central, pues las cuentas de la Seguridad Social van por separado y aún registran superávit. La medida perseguiría, por tanto, retrasar al máximo el deterioro de las cuentas de la Seguridad Social, que contrarrestan el saldo negativo de todas las administraciones públicas.

Los pensionistas verán congeladas por primera vez sus prestaciones en 2011

La medida no afectará a los perceptores de rentas mínimas, según el Ejecutivo

LUCÍA ABELLÁN, Madrid

Los pensionistas sufrirán una congelación de sus prestaciones por primera vez en la democracia. Se trata de una medida especialmente traumática, pues este colectivo tiene garantizada por ley, hace más de 10 años, la revalorización anual de sus rentas tomando como referencia la inflación real (no sólo el 2% previsto). Así, los 8,6 millones de personas que perciben una pensión contributiva, blindada hasta ahora a las subidas de precios, se someterán en 2011 a los vaivenes de la inflación. Será un año, eso sí, en que las previsiones de subidas de precios resultan más moderadas que en otros ejercicios. Aun así, los analistas esperan una media del 1,6%.

Esa congelación general ex-

El Gobierno espera ahorrar así unos 1.500 millones de euros al año

me a los dos colectivos más vulnerables: los perceptores de pensiones mínimas (aproximadamente un 30% del total) y otro medio millón de personas que cobra pensiones no contributivas (aquellas para las que no se exige cotización previa). En ambos casos las rentas son muy bajas: alrededor de 300 euros al mes en las no contributivas y entre 180 y 836 en el caso de las mínimas, según la modalidad.

Al comunicar el sacrificio que se exige a los pensionistas para el año próximo, el presi-

dente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que las prestaciones mínimas han subido una media del 30% en la legislatura y media de Gobierno socialista. Y las generales han ganado 3,7 puntos de poder adquisitivo. "Entiendo que es un esfuerzo también serio para los pensionistas después de una política que ha intentado ser de la máxima sensibilidad" [con ese colectivo], trató de justificar Zapatero en la réplica a las intervenciones

de los grupos políticos en el Congreso.

Con la congelación anunciada, el Gobierno espera poder ahorrar unos 1.500 millones de euros al año, según la Seguridad Social. La partida de pensiones es la más voluminosa del Presupuesto —absorbe uno de cada tres euros de gasto—, por lo que cualquier retoque en este capítulo, por pequeño que sea, genera importantes recursos.

Hasta ahora ningún gober-

nante se había atrevido a aplicar medidas de austeridad a los pensionistas, un colectivo especialmente sensible por su edad y las escasas rentas que percibe. La pensión media en España se sitúa en 776 euros al mes, con una cuantía algo mejor para las de jubilación (880 euros). La congelación para 2011 requerirá alguna argucia legal que permita dejar en suspenso la norma que desde finales de los noventa garantiza las subidas según la inflación.



La deuda acumulada con los dependientes ronda los 700 millones. / ISAAC F. CALVO

La ley se modifica para no pagar los atrasos a las personas dependientes

CARMEN MORÁN, Madrid

La deuda acumulada con los ciudadanos por los retrasos en los trámites de la Ley de Dependencia supone cerca de 700 millones de euros. El año pasado, el 40% de todo el gasto en prestaciones económicas se fue en retroactividad, en pagar atrasos. Muerto el perro, se acabó la rabia. En junio, el Gobierno aprobará un decreto ley para que las comunidades entreguen las ayudas en los seis meses establecidos y, si no se retrasan, se ahorrarán los pagos por retroactividad que hasta ahora se contemplaban en la ley. Pero cada mes que pase de los seis previstos, la deuda volverá a correr y las comunidades tendrán que pagarla. Eso supone, según el Gobierno, un ahorro de 624 millones en

tres años, que permitiría atender a más de 48.000 personas.

Aunque el texto dice que se deben abonar los atrasos desde el momento de la solicitud, sólo algunas lo hacían así; otras ni siquiera pagaban. En algunas regiones se retribuía desde el momento en que se valoraba al ciudadano y en otras desde que le prescribían la ayuda. Todo eso lo perderán los ciudadanos dependientes, que querrán que sus solicitudes se resuelvan no en seis meses, sino en uno, porque ya no hay pagos atrasados.

¿Pero qué pasa con la deuda generada hasta ahora por atrasos? Las comunidades tendrán hasta cinco años para pagarla a plazos, un balón de oxígeno que beneficia sobre todo a las que peor han gestionado esta ley —Ca-

narias, Valencia, Baleares, Madrid, Cataluña— porque es donde más tiempo esperan los ciudadanos la ayuda a la que tienen derecho, en ocasiones entre 12 y 18 meses. La propuesta del Gobierno es que paguen un quinto cada año. Eso les permitirá, dicen, una liquidez de 431 millones en los tres años próximos, para atender a 21.400 personas. Los gobiernos autónomos decidirán. Esos pagos aplazados pueden convertirse en una herencia macabra para los familiares. Más de la mitad de los dependientes son mayores de 80 años y su esperanza de vida no supera los dos o tres años más.

La retroactividad sólo se paga en dos casos: cuando se trata de una prestación económica para cuidar al anciano en casa o en la llamada prestación vinculada al

servicio, una cuantía que recibe el usuario para costear, por ejemplo, una plaza en una residencia privada porque no hay públicas disponibles. En este caso es aún más grave, porque si los familiares no tienen dinero para pagar la residencia de nada les servirá que los atrasos lleguen años después.

El Gobierno considera que la medida contribuirá a "desincentivar la preferencia de los ciudadanos por la prestación económica en favor de los servicios", dijo ayer el secretario general de Política Social, Francisco Moza.

Para la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la medida "puede agilizar el sistema porque obliga a las comunidades a resolver en seis meses o, de lo contrario, a pagar con carácter retroactivo".

Plan de choque de Zapatero El recorte social

ESPAÑA

Fomento estudia dónde recortar 6.000 millones

Blanco replantea las inversiones de su ministerio para este año y 2011

LARA OTERO
Madrid

Con 6.045 millones de euros se pueden construir entre 200 y 500 kilómetros de línea de alta velocidad. Suponen casi un tercio de las inversiones aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado para el Grupo Fomento (unos 17.200 millones de euros) este año. Y en esa cantidad tendrá que recortar el Ministerio de Fomento sus inversiones directas entre este año y el próximo, según avanzó ayer el presidente Zapatero.

El hachazo al presupuesto del departamento que dirige José Blanco se suma al de 1.500 millones aprobado hace unos meses, que en parte se iba a compensar con el plan extraordinario de infraestructuras con financiación público-privada de 17.000 millones anunciado hace unas semanas.

A Fomento le ha cogido con el pie cambiado este nuevo recorte, que no esperaba tan drástico, de modo que los equipos del ministerio estudiaban a partir de mediodía de ayer de dónde recortar, qué proyectos posponer, según comentó el portavoz del departamento. Aún no se ha decidido en cuánto dinero se reducirá la inversión este año, pero se baraja la posibilidad de que sean algo más de 2.000 millones.

Por esa razón, Fomento se declaraba incapaz de dar una relación de obras afectadas, si bien el ministro avanzó por la mañana en los pasillos del Congreso que "la lógica" señala que el recorte no afectará a la línea de alta velocidad a la Comunidad Valenciana,

que está previsto poner en funcionamiento a final de este año. Añadió que las obras proyectadas sufrirán una demora media de seis meses y máxima de un año.

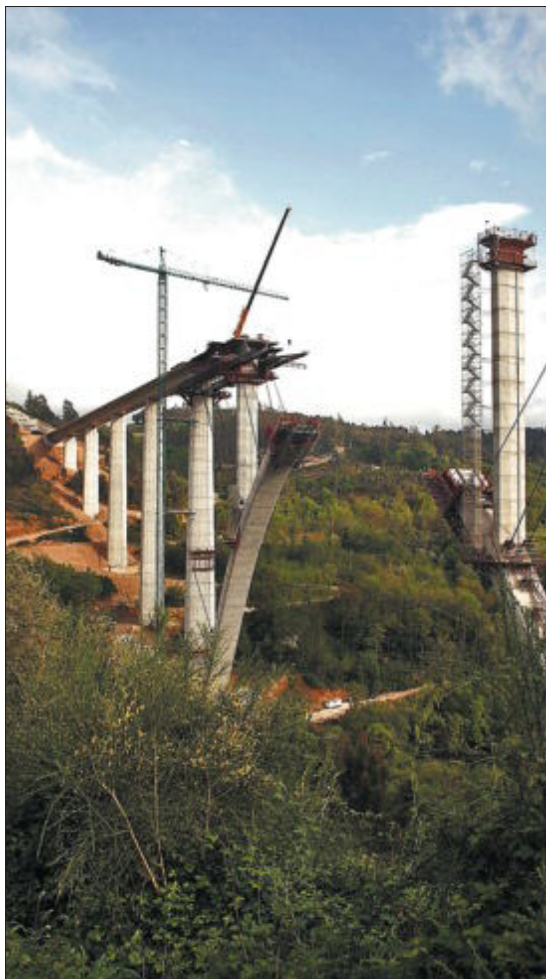
El miércoles próximo Blanco comparecerá en la Comisión de Fomento del Congreso para explicar el programa de inversión público-privada de 17.000 millones y el recorte adicional. Una de las obras a la que según fuentes parlamentarias se había renunciado ya es la autovía del Mediterráneo (A-7), cuyo trazado discurre paralelo a una autopista de peaje.

Con el ajuste anunciado ayer, también se tiene que revisar la lista de obras de ese plan, ya que es posible que se decida incluir en él inversiones que iban a ser ejecutadas con dinero de los presupuestos, y que se conside-

El ministro detallará el miércoles las obras afectadas

re que debe dárseles prioridad.

El portavoz del ministerio señala que se había asumido un recorte de 1.500 millones en gasto corriente, y que ya no hay margen en ese capítulo. Recuerda que en la negociación de presupuestos para 2010 este departamento había salido muy airoso (apenas se rebajó el presupuesto) pero ahora hay que abordar un ajuste mucho más doloroso. Asegura que Economía se ha mostrado comprensivo y ha da-



Obras del AVE en el tramo Ourense-Santiago de Compostela. / A. IGLESIAS

do unos días para que Fomento estudie el encaje del recorte en su programación, dado que son ajustes "muy sensibles", también en lo político.

Blanco siempre ha defendido la necesidad de mantener la inversión productiva para, por un lado, contribuir al empleo y a la actividad económica en un sector, el de la construcción, muy castigado por la crisis y, por otro, poner las bases para mejorar la competitividad del país.

Coinciden con el ministro en ese aspecto algunas asociaciones del sector, que mostraron su inquietud por el recorte. La Confederación Nacional de la Construcción señaló que "afectará singular y negativamente al crecimiento económico, a la recuperación del empleo y alejará en el tiempo la salida de la crisis". La Asociación Nacional de Constructoras Independientes auguró que tendrá un impacto muy negativo en las empresas del ramo.

El polémico 'cheque-bebé' desaparecerá el 31 de diciembre

C. M., Madrid

El año pasado, en la apertura del curso político, el presidente Zapatero anunciaba medidas de contención del déficit, pero recaló que no iban a afectar al *cheque-bebé*. "No hay ni la más mínima posibilidad de cambiarlo", afirmó tajante.

Pues ya ha caído. El cheque de 2.500 euros por cada hijo nacido o adoptado desaparece con el fin de este año. Los que nazcan en enero ya no tendrán esa ayuda, que se vendió como un acicate para la natalidad. El PP, que ayer criticó la pérdida de esta protección social, lo calificó en su día de "absolutamente electoralista" y lo tildó de *"cheque-voto"* porque empezó a cobrarse en diciembre de 2007, cuatro meses antes de las elecciones generales.

Al líder de la oposición, Mariano Rajoy, le disgusta ahora que las "futuras madres" pierdan esta ayuda.

El primer año la Agencia Tributaria pagó 1.002 millones de euros para atender las más de 400.000 solicitudes que presentaron los padres. Era cercano a lo que había previsto el Gobierno. En total se han pagado desde que entró en vigor la medida 2.500 millones de euros. Las asociaciones de familias criticaron ayer la retirada de esta ayuda. La Federación Española de Familias Numerosas dijo que "una vez más, la familia es la gran perjudicada, la que más sufre la crisis y la que paga las consecuencias de la mala gestión política".

Pero nunca estuvo exenta de polémica. Hasta el vicepresidente económico del momento, Pedro Solbes, estaba contrariado con la idea del *cheque-bebé*, que supondría un 10% del superávit y porque tampoco estaba convencido de su eficacia.

'Políticas placebo'

Los expertos politólogos llaman a esta y otras medidas similares *políticas placebo*, "iniciativas que buscan atraer muchos electores sin grandes transformaciones, pero que tienen escasa repercusión real", en palabras del catedrático José Luis Dader, experto en comunicación política.

A buena parte de la izquierda tampoco le gustaba esta medida, por universal, es decir, que premiaba igual a ricos y pobres, sin progresividad de ninguna clase. Opinan que una buena red de guarderías sería más eficaz para potenciar la natalidad, y más justa.

Hasta la Iglesia criticó el *cheque-bebé*, porque, en su universalidad entraban las madres solteras y los padres adoptantes, y eso de "promover que los hijos vengan al mundo sin padre o sin madre no se debe hacer", dijo un portavoz de la Conferencia Episcopal.

La nueva reducción en el gasto en fármacos permitirá ahorrar 1.300 millones anuales

M. R. SAHUQUILLO, Madrid

El Gobierno intenta, una vez más, recortar el gasto en Sanidad. Y lo hace, de nuevo, metiendo la tijera en el porcentaje de la tarta destinado a fármacos. Ayer, José Luis Rodríguez Zapatero anunció que reducirá el precio de los fármacos sujetos a patente. Esta medida, junto al cambio de formato en los envases de los medicamentos para incluir la unidad, supondrá un ahorro de unos 1.300 millones anuales.

Esta cantidad se suma a los 2.500 millones ya anunciados hace un mes con un primer paquete de acciones pactado con todas las comunidades autónomas. Medidas que incidían sobre todo en el gasto farmacéuti-

co y que incluían la reducción de precio en los medicamentos genéricos o el cambio en el sistema de precios de referencia (que ahorrarían unos 1.500 millones); y la creación de una central de compras única (que junto a otras medidas más livianas aportaría el resto de ahorro).

La sanidad absorbe 60.000 millones de euros anuales —un 6% del PIB— y uno de los principales puntos de fuga es el capítulo farmacéutico. El pago de recetas se llevó en 2009 el 32% de los recursos sanitarios (el 25% de media en la Unión Europea). Así, esta parte del gasto es la más factible de reducir. Esta vez le toca el turno a los medicamentos de patente, que verán reducido su precio de manera

escalonada. "Se bajará más el precio a los que más tiempo llevan en el mercado", explica José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad. Con esta acción —que entrará en vigor el

Algunas medicinas pasarán a ser distribuidas en formato monodosis

próximo agosto— se logrará un ahorro anual de 1.050 millones al año, según Sanidad. "Además, supondrá un ahorro de 50 millones para el bolsillo de los ciudadanos", apunta Olmos. La decisión, sin embargo, no ha

sentado bien a la industria farmacéutica, que la ha tachado de "inasumible". "Puede ser un punto de no retorno a la innovación", aseguró ayer Farmaindustria en un comunicado.

La siguiente acción de este segundo paquete de medidas se basa en la racionalización. Se reformará el formato de presentación de aquellos fármacos que tratan procesos estandarizados para adecuarlos a la duración del tratamiento. Es decir, si para tratar una bronquitis tipo se necesita normalmente tomar tres cápsulas de un determinado medicamento durante tres días, el envase de este medicamento se adaptará a eso. Además, se podrán adquirir también fármacos en formato unidosos.

Las autonomías deberán ahorrar 1.200 millones

EL PAÍS, Madrid

Una de las medidas clave que pretende implantar el Gobierno es conseguir un ahorro adicional de 1.200 millones de euros en las comunidades autónomas. Así lo anunció en su discurso de ayer José Luis Rodríguez Zapatero, quien además, recordó que la administración autonómica y local supone el 35% del gasto en España, comparado con el 20% que corresponde al Estado central.

En esta misma idea incidió la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, durante la sesión de control posterior al debate sobre los recortes. Salgado instó ayer al PP a asumir las medidas de austeridad que se aplicarán en la Administración General del Estado, porque eso permitiría un ahorro adicional en las comunidades autónomas de 20.000 millones de euros.

Salgado acusó al PP de estar "constantemente" atacando a las comunidades autónomas y recordó que el Gobierno no tiene competencias para decir "cómo tienen que organizar su capítulo dos [relativo a los presupuestos, que recoge los gastos corrientes de una administración]".

El Gobierno ya intentó un acuerdo de todas las administraciones para reducir el déficit el pasado mes de diciembre en una Conferencia de Presidentes. La reunión fracasó por la negativa del PP a firmar ningún acuerdo (a pesar de que fueron aceptadas la mayoría de sus propuestas). La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, resumió la estrategia del PP al afirmar que no pensaba hacerse corresponsable de la crisis junto a Zapatero.

El Gobierno rompe su promesa de no reducir la cooperación por la crisis

El recorte de 600 millones de ayuda al desarrollo no afectará a Haití

NATALIA JUNQUERA
Madrid

"No reduciré la ayuda al desarrollo pese a la crisis". El presidente Zapatero lo prometió muchas veces, incluso se atrevió a instar a otros países a que no se dejaran tentar por la recesión para reducir su compromiso internacional. También la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, lanzó la misma promesa en múltiples ocasiones; la última, en Haití, tras la conferencia de donantes, hace poco más de un mes: "La política del Gobierno es mantener los niveles de cooperación. No es un área que hayamos creído que deba ser sacrificada por razones de la crisis, porque sabemos que hay situaciones muy duras y eso forma parte de la acción política del Gobierno". Pero, finalmente, la crisis sí ha traído sacrificios: 600 millones menos de ayuda al desarrollo entre 2010 y 2011, a razón de 300 millones cada año. El presupuesto del Ejecutivo para ayuda al desarrollo este año asciende a 5.100 millones de euros.

En la Secretaría de Estado de Cooperación se temían el recorte, aunque hasta ayer por la mañana, cuando el presidente Zapatero anunció sus medidas para reducir el déficit, no supieron de cuánto. A partir de ese momento, la secretaria de Estado, Soraya Rodríguez, y el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, comenzaron a repasar los proyectos para elegir los prescindibles y llevar una propuesta mañana al Consejo de Ministros.

Rodríguez insiste en que el recorte no afectará a los 346 millones de euros que España comprometió en la conferencia de donantes para Haití en la ONU. "Ni un euro", remachó. Tampoco a los



Voluntarios de Cruz Roja cargan ayuda humanitaria para la franja de Gaza. / ÁNGEL SÁNCHEZ

grandes proyectos en las llamadas zonas de asociación amplia para España, como Guatemala, Perú, Ecuador, Marruecos, Mauritania, los territorios palestinos o la población saharauí, entre otros, según un portavoz.

El recorte ha obligado a renunciar al objetivo de destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a ayuda al desarrollo en 2012, como había prometido Zapatero. "La mayoría de los países de la UE se fijaron ese objetivo para 2015, pero España, cuando aún no estábamos en crisis, quiso ade-

lantarlo a 2012", cuentan fuentes del Gobierno. "El recorte obliga ahora a aplazar ese objetivo tres años más". España destina hoy el 0,47% de su presupuesto a ayuda al desarrollo—la media europea es del 0,42%—. "Cuando el PSOE llegó al Gobierno, ese porcentaje era del 0,23%", recuerdan.

Las ONG recibieron como una "pésima noticia" el recorte. "La crisis no puede ser una excusa para incumplir la responsabilidad internacional con los más vulnerables", opinó el presidente de la Coordinadora de ONG para el De-

sarrollo, Eduardo Sánchez. "Es ahora cuando más sufren el impacto de una crisis que no han generado. Por primera vez en la historia se han superado los mil millones de personas con hambre", añadió Ariane Arpa, directora general de Intermon Oxfam, propuso a los países de la UE una "Tasa a las Transacciones Financieras que grave los movimientos de capitales, y medidas para castigar el agujero negro de la evasión fiscal a través de los paraísos fiscales. Ahí están los recursos para combatir la crisis y el déficit".

Ya estamos aquí

ANÁLISIS

Juan Rubio y Pablo Vázquez

Las medidas anunciadas ayer por el presidente del Gobierno son formalmente inapelables: reducir la inversión era la única forma de hacer un plan de ajuste creíble; rebajar el sueldo de los funcionarios y la pensión —en términos reales— a los mayores es incorporar a dos colectivos que en buena parte habían sido inmunes a la crisis en el mismo barco donde navega el resto de la sociedad española; el *cheque-bébé* y la reducción —más bien simbólica— de la ayuda al desarrollo equivalen a los recortes de gastos prescindibles que hace cualquier hogar cuando toca apretarse el cinturón.

La eliminación del régimen de jubilación parcial, la rebaja de medicamentos y la reducción de la ayuda por dependencia son tres machetazos a fuentes de gasto incontrolado que venían siendo reclamados desde hace meses por los que conocen esos problemas, con independencia de su color político. Finalmente, el

recorte de 1.200 millones en las Administraciones territoriales es seguro muy necesario, pero sin haberlo concertado con ellas, poco probable.

Merece la pena dar un paso atrás y tratar de poner en contexto estos anuncios con los acontecimientos que llevamos viviendo estos meses. Como explicaba hace unos días Tano Santos en el *blog* de Fedea, *Nadaesgratis*, la crisis es una crisis de deuda, en algunos países mayoritariamente del sector privado (España, EE UU), y en otros del sector público (Grecia, Japón, Bélgica, Italia).

En el caso de España, lo que hace insostenible nuestra deuda no es tanto nuestra situación actual, como acertadamente indica el Gobierno, como nuestras malas perspectivas de crecimiento, nuestros elevadísimos niveles de desempleo y los fuertes compromisos de gasto futuro asociados a pensiones y sanidad. Frente a estos problemas la única receta posible son las reformas estructurales, tan debatidas como poco aplicadas: las reformas del mercado de trabajo y del sistema financiero que nos permitan tener unas

mejores perspectivas de crecimiento, y las reformas del sistema sanitario y de pensiones que nos permitan mantener bajo control el presupuesto en el medio y largo plazo.

Reformas que, por desgracia, aún hoy ocupaban un lugar muy marginal en las palabras del presidente. No existe compromiso para liderarlas y —como viene siendo demasiado habitual— se van pos-

El Ejecutivo ha tomado medidas impopulares, pero que no piense que su faena ha terminado

poniendo. Reformas que se van a hacer más complicadas ante unos sindicatos que necesitaban una buena excusa para movilizar a unas bases desencantadas y que se han crecido ante un Gobierno con poca voluntad política para atajar los problemas de raíz.

¿Por qué entonces estas medidas de ajuste fiscal, que van a tener un impacto negativo a corto plazo en el crecimiento? El motivo más inmediato es porque así nos lo han exigido hace unos días. La falta de reformas que hagan sostenible nuestro Estado del Bienestar asustaba en los mercados... y en las cancillerías. El resultado es que pagamos más cara nuestra deuda... y tenemos que hacer paquetes de ajuste para ganar credibilidad. Dos caras de una moneda que no hubiéramos tenido probablemente que utilizar. Pero lo cierto es que ya estamos aquí.

Tenemos un Gobierno que se ha atrevido con medidas impopulares, que ha tenido el valor de hacer sangre; y que necesitamos que no desfallezca. Que no piense que ya ha terminado su faena, sino que muestre la misma determinación que ha tenido en las últimas 72 horas para enfrentarse ahora a los que defienden el inmovilismo. Si no será en buena medida un esfuerzo vano. Será, además, la única forma de no tener que pasar otra semana de infarto para él y para todos.

Juan Rubio es profesor en Duke University, y Pablo Vázquez, en la Universidad Complutense de Madrid. Ambos son investigadores de Fedea.